

Santiago, catorce de noviembre de dos mil veintitrés

Vistos:

En estos autos Rol 58-2013, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, iniciados a fin de investigar los delitos de secuestro calificado en las personas de Oscar Dante Valdivia González, de Luis Hernán Núñez Rojas y de Rodrigo Alejandro Medina Hernández, por sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, escrita a fojas 2.548 y siguientes, pronunciada por el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Mario Carroza Espinosa, se absolvió a los encausados José Abel Aravena Ruíz y Jorge Claudio Andrade Gómez, del cargo formulado en su contra como autores del delito de secuestro calificado de las referidas víctimas, hechos perpetrados en la ciudad de Santiago a partir del 26 y del 27 de mayo de 1976, condenando a Pedro Espinoza Bravo y a Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autores de dichos ilícitos, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, y a las accesorias legales.

En el aspecto civil, condenó al Fisco de Chile a pagar, a cada uno de los hermanos de Luis Hernán Núñez Rojas, la suma de \$20.000.000, misma suma que se otorgó a la cónyuge de Óscar Valdivia González; asimismo, se dispuso el pago de \$30.000.000 a la hija de Óscar Valdivia González; \$20.000.000, a cada uno de sus hermanos; y, \$10.000.000 a su sobrina, con los reajustes e intereses referidos en el mismo fallo.

Impugnada dicha decisión por la vía de sendos recursos de apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de nueve de diciembre de dos



mil veinte, escrita a fojas 2.839 y siguientes, confirmó el fallo de primer grado con declaración que la pena impuesta a Pedro Espinoza Bravo y a Miguel Krassnoff Martchenko queda regulada en el quantum de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, y accesorias legales como autores de los referidos ilícitos.

En el aspecto civil, la confirmó con declaración de elevar los montos a indemnizar por parte del Fisco de Chile a cada uno de los demandantes. A cada uno de los hermanos de la víctima Luis Hernán Núñez Rojas, la indemnización fue regulada en la suma de \$30.000.000; en \$50.000.000 para la cónyuge de Oscar Valdivia González; y, en la suma de \$80.000.000 para su hija; en \$30.000.000 para cada uno de los hermanos de Óscar Valdivia González; y, \$20.000.000 para su sobrina.

Contra este último fallo, a fojas 2.868 Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —en adelante, el Programa— recurrió de casación en la forma, en tanto que la defensa de Pedro Octavio Espinoza Bravo y los querellantes recurrieron de casación en fondo, según se lee de sus presentaciones de fojas 2.859, 2.875 y 2.884, respectivamente, los cuales fueron traídos en relación por dictamen de 9 de marzo de 2021, según se lee a fojas 2.906.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de casación formal propuesto por el Programa se funda en la causal de invalidación prevista en el artículo 541, N° 9 del Código de



Procedimiento Penal, en relación a los requisitos del artículo 500, N°s 4 y 5 del mismo cuerpo legal. Lo anterior, respecto de las decisiones de absolución de los encartados Jorge Claudio Andrade Gómez y José Abel Aravena Ruiz, por las cuales el fallo de segunda instancia hizo suyas las consideraciones contenidas en fallo de primer grado.

Afirma que, la sentencia que impugna no contiene referencia doctrinal alguna, ningún razonamiento jurídico mayor ni tampoco ponderación alguna de los elementos de convicción existentes en autos en relación a los referidos acusados, precisando aquellos elementos de convicción que demuestran la participación de los encartados en los hechos investigados, razón por la cual solicita invalidar la sentencia de segunda instancia y se dicte sentencia de reemplazo que, además, condene a los referidos acusados como autores de los delitos de secuestro calificado perpetrados en contra de las víctimas, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, la defensa del encausado Pedro Octavio Espinoza Bravo funda el recurso de casación en el fondo, en primer lugar, en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo, por haberse violado en concepto del articulista las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 457, N° 6 y 488 del mismo cuerpo legal, en relación con los artículos 1º, 15 y 141 del código punitivo.

Afirma que el fallo de segundo grado ha efectuado una incorrecta ponderación de los elementos de convicción allegados al procedimiento, ya que en



ninguna parte de la sentencia de primera instancia fue descrita la presunta conducta desplegada por Espinoza Bravo, argumentando que sólo en el mes de julio 1976 el encartado asumió como Director de Operaciones de la DINA y no antes, razón por la cual no estuvo a cargo del cuartel Villa Grimaldi ni tampoco era Jefe de Operaciones de la DINA a la época de los hechos. Asimismo, da cuenta de la dinámica de relación de jerarquía de las Brigadas de dicha organización, argumentando que no corresponde condenar a alguien por pertenecer a ella.

En segundo lugar, funda su arbitrio en la causal contenida en el artículo 546, N° 1 del compendio adjetivo, al determinarse erróneamente la participación que se le ha atribuido en los delitos de secuestro calificado, toda vez que la sentencia no señala cuál fue su actuar o su omisión, no existiendo antecedentes que lo vinculen a tales hechos, resultando que solamente se le condena por ostentar un alto cargo en la DINA.

Estima que todas las infracciones que denuncia permiten considerar que, de haberse ponderado correctamente los medios de pruebas, a lo más podría habersele condenado como encubridor de los ilícitos investigados al tener conocimiento de la existencia de detenidos en dicho lugar, solicitando se invalide la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que rebaje en dos o tres la pena impuesta a su respecto.

Tercero: Que, el recurso de casación en el fondo sostenido por los querellantes, representados por la abogada doña Magdalena Garcés, se funda en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código de enjuiciamiento criminal



en relación al artículo 488, N°s 1 y 2 del mismo cuerpo legal, dado que el fallo de segundo grado ha vulnerado las normas reguladoras de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente lo dispositivo del fallo.

Expone que, lo anterior se relaciona con las normas contenidas en los artículos 7, 14, 15 N°s 1 y 3 y 141, inciso final, todos del código de castigo en su texto vigente a la época de los hechos, afirmando que existen elementos de cargo suficientes que permiten constituir presunciones judiciales para establecer la participación de los encartados absueltos por el fallo que impugna, José Aravena Ruíz y Jorge Andrade Gómez, en las hipótesis de autoría que establecen los numerales 1° y 3°, del artículo 15 del Código Penal para el delito de secuestro calificado consumado en contra de las víctimas de autos.

En concepto de la recurrente, los antecedentes que obran en autos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código Penal para atribuir participación en calidad autores a los encartados. Respecto de José Abel Aravena Ruiz, describe distintos antecedentes aportados, incluso por sus propios compañeros de armas, los cuales permiten demostrar que formaba parte del equipo Halcón de la DINA el cual, a su vez, dependía de la Agrupación Caupolicán, que estaba a cargo de la persecución y represión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR al cual pertenecían las víctimas, señalando los diversos elementos de cargo que permiten concluir lo anterior.

Respecto de Jorge Andrade Gómez, es posible acreditar que como Oficial de Ejército fue destinado la Brigada Caupolicán de la DINA estando a cargo de la



Agrupación Halcón, reemplazando a Miguel Krassnoff. La Agrupación Halcón estaba dedicada, fundamentalmente, a la represión del MIR entre cuyas víctimas se encontraba Óscar Valdivia, Luis Núñez y Rodrigo Medina, manteniendo personal bajo su mando. Concluye que, de no haberse producido la infracción a las normas reguladoras de la prueba que invoca, la sentencia debió haber condenado a los acusados que resultaron absueltos, razón por la cual pide se invalide la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que condene a Jorge Andrade Gómez y a José Aravena Ruíz, en calidad autores de los delitos de secuestro calificado, cada uno a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y accesorias legales.

Cuarto: Que, los querellantes representados por el abogado don Alberto Espinoza recurren de casación sustancial, en términos análogos del arbitrio analizado en el motivo anterior, esto fundado en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 485 y 487, junto con el 488 N°s 1 y 2 del mismo cuerpo legal en razón de la decisión de absolución de los mismos encartados, invocando las citadas normas vulneradas del Código Penal, concluyendo que de haberse valorado correctamente los medios de convicción conforme a las reglas reguladoras de la prueba, se debió necesariamente haber condenado a los referidos encartados como autores del delito de secuestro de Luis Núñez Rojas, razón por la cual solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia reemplazo que los condene como autores del delito de secuestro calificado de Luis Núñez Rojas al máximo de las penas establecidas en la ley, con costas.



Quinto: Que, como se consigna en el motivo quinto de la sentencia de primer grado —no alterada en esta parte por la de alzada—, ésta tuvo por demostrados los siguientes hechos:

“A) Que en mayo de 1976, el gobierno militar mantenía un organismo de represión política, denominado Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que a la sazón era una estructura organizada, jerarquizada, con medios propios y recintos de detención clandestinos.

Las operaciones de la DINA en la región metropolitana estaban encargadas a la Brigada de Inteligencia Metropolitana, BIM, que contaba con un oficial de Ejército al mando y una plana mayor que los asesoraba en labores de inteligencia. A su vez las operaciones de la brigada eran desarrolladas por agrupaciones o equipos de trabajo, compuestas por miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, quienes utilizaban los recintos o centros de detención para cumplir sus labores restrictivas de derechos. Una de estas agrupaciones fue "Halcón", dependiente de la "Brigada Caupolicán", encargada en ese entonces del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR;

B) Que en ese contexto, la víctima Oscar Dante Valdivia González de 27 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y de la Federación de Estudiantes Vespertinos, fue detenido el día 26 de mayo de 1976, en horas de la tarde, en la vía pública, en el trayecto que realizaba entre el domicilio de sus abuelos y su casa, en la comuna de Santiago, oportunidad en que también fueron allanados distintos domicilio de sus familiares, en los cuales



los agentes retiraron libros, bultos, panfletos y presuntamente armas de Valdivia González;

C) Que ese mismo día, a las 11:00 horas, Luis Hernán Núñez Rojas de 24 años, estudiante de filosofía, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y miembro de la Federación de Estudiantes Vespertinos, es detenido en la vía pública luego de haber concurrido a su facultad a rendir un examen;

D) Que al día siguiente, Rodrigo Alejandro Medina Hernández, 18 años, estudiante de filosofía, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, es detenido en la vía pública en avenida José Miguel Carrera, cerca de las 20:00 horas;

E) Que por sobrevivientes de la reclusión en Villa Grimaldi, se ha comprobado que los detenidos y víctimas de este proceso, Oscar Dante Valdivia González, Luis Hernán Núñez Rojas y Rodrigo Alejandro Medina Hernández, fueron vistos al interior del cuartel Terranova en meses posteriores a su detención, lugar desde donde se les pierde el rastro y hasta la fecha se desconocen sus paraderos, a pesar de todos los esfuerzos de sus familiares”.

Estos hechos fueron determinados como constitutivos de los delitos de secuestro calificado, previsto y sancionado por el inciso 3° del artículo 141, del Código Penal vigente a la época de ocurrencia de los hechos.

Sexto: Que, en lo que respecta al arbitrio propuesto por el Programa, el reproche formal no se formula respecto del contenido del fallo impugnado —el cual reproduce los fundamentos del fallo de primera instancia en la decisión de



absolución— sino que, a través del arbitrio recursivo, se pretende cuestionar el contenido del fallo de primer grado. Sin embargo, en tal sentido, para que pueda ser admitido por el vicio invocado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, resulta indispensable que la parte que lo entabla haya reclamado de las faltas, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley.

En la especie, a tal exigencia no se dio cumplimiento, desde que la sentencia impugnada es confirmatoria —en el acápite cuestionado— de la de primera instancia y en contra de esta última el Programa no dedujo el pertinente recurso de nulidad formal. En consecuencia, el recurso de casación en la forma no podrá prosperar, por falta de preparación.

Séptimo: Que, en relación a la forma de interposición del recurso de casación sustancial propuesto por la defensa de Espinoza Bravo, a través de las causales que se postulan se denuncia, en primer lugar, una incorrecta aplicación de las normas reguladoras de la prueba, ya que en concepto del articulista no existen antecedentes ni presunciones para atribuir participación a su defendido en los hechos investigados, para enseguida cuestionar la participación establecida por los sentenciadores del fondo, reprochando que la sentencia no expresa cuál fue la acción u omisión atribuida y que la decisión de condena solo estribaría en el haber pertenecido a la DINA.

En otros términos, los fundamentos parecen ir buscando la senda de la absolución, por cuanto se argumenta que los elementos de convicción no logran



demostrar una acción u omisión punible y, asimismo, que no existen antecedentes que lo vinculen con los delitos de secuestro, cuestionando que se le haya atribuido participación para, a renglón seguido, solicitar que la pena impuesta le sea reducida en dos o tres grados, por no haberse establecido por los medios de prueba legal su participación penal.

Como logra advertirse, las peticiones contenidas en el recurso resultan opuestas o incoherentes con su fundamento, dado que lo natural hubiese sido que, en razón de las causales y su desarrollo se hubiese impetrado la absolución de Espinoza Bravo y, sin embargo, lo pedido es la imposición de una pena morigerada, inobservancia que en un recurso de derecho estricto no es posible desatender, lo que basta para rechazar el recurso en análisis.

Octavo: Que, incumbe analizar los recursos de casación propuestos por los querellantes, a través de los abogados doña Magdalena Garcés y don Alberto Espinoza, en lo que guarda relación con las decisiones de absolución dispuestas tanto en primera instancia, como en el fallo de segundo grado, de los encartados José Aravena Ruíz y a Jorge Andrade Gómez de los cargos formulados en su contra como autores de los delitos de secuestro calificado de Oscar Dante Valdivia González, de Luis Hernán Núñez Rojas y de Rodrigo Alejandro Medina Hernández.

Noveno: Que, de acuerdo al artículo 485 del Código de Procedimiento Penal, “presunción en juicio criminal es la consecuencia que de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de



un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona”.

Que, según constante jurisprudencia, los numerales 1 y 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal constituyen leyes reguladoras de la prueba, en cuanto requieren que las presunciones se funden en hechos reales y probados y ser múltiples, desde que en estos numerales se establecen dos exigencias que significan limitaciones en la facultad de estimación del juez, en el sentido que las presunciones no pueden fundarse en otras presunciones, sean legales o judiciales, y de que una sola presunción es ineficaz para constituir la prueba completa de un hecho (Repertorio del Código de Procedimiento Penal, T. II, pp. 273 y 274, cuarenta sentencias citadas).

Décimo: Que, la presunción judicial, como toda presunción, constituye el ejemplo más relevante de la prueba indirecta, la cual reside en la inferencia que induce del hecho conocido el hecho sometido a prueba, o sea, que el resultado se obtiene por razonamiento en lugar de ser comprobado o declarado verbalmente por escrito, como en otras pruebas. (Latorre, Graciela. “Las presunciones en el proceso penal”, Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Editorial Universitaria, 1964, p. 145).

Las presunciones judiciales, como sus semejantes legales, parten de lo conocido a lo desconocido, pero esta circunstancia especialmente importante en materia penal es que el juez a diferencia del magistrado civil que dispone de una



versión de los hechos establecidos por las partes, actúa ante lo desconocido y a él le incumbe la búsqueda del autor del hecho o la determinación de la forma en que habría actuado en su perpetración (op. cit.).

La prueba de presunciones, basada sobre la inferencia o el razonamiento, tiene, como punto de partida, por tanto, los hechos o circunstancias que se suponen probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, que constituye la X del problema, ya sea una incógnita por determinar, ya un dato por completar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado (Gorphe, François. “De la apreciación de las pruebas”, Edic. Europa-América, Buenos Aires, 1995, p. 250).

La doctrina suele diferenciar entre indicios y presunciones, conceptos que nuestra ley procesal identifica, según se desprende del mismo Mensaje del Código, unido al texto de los artículos 110 y 457. En realidad, precisó el entonces Ministro de esta Corte Suprema don Marcos Libedinsky Tschorne, en su prevención contenida en la sentencia de 30 de mayo de 1995, en Rol 30.174-1994, debe concluirse que el indicio y la presunción son conceptos diferentes pero que se relacionan, por cuanto el indicio (la voz latina *indicium* deriva de *indicere*, que significa indicar, hacer conocer algo) es un hecho conocido del cual se infiere la existencia de otro hecho desconocido, mediante un razonamiento del juez que es lo que constituye la presunción. Este es el alcance del artículo 485 del Código de Procedimiento Penal en cuanto señala que la presunción en el juicio criminal es la consecuencia que, de hechos conocidos o manifestados en el proceso (indicio o



hecho indiciario), deduce el tribunal (razonamiento, operación mental de inferencia lógica) ya en cuanto a la perpetración del delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona (RDJ, T. XCII, 1995, 2ª parte, secc. 4ª, pp. 70 y ss.).

Que, la estimación del indicio como hecho base y la presunción como inferencia constituye la tesis más generalizada. Muñoz Sabaté afirma que el indicio no es ningún razonamiento discursivo, no representa ninguna categoría especial de inferencia como lo es en cambio la presunción, sino que equivale a la afirmación base de la cual parte precisamente aquella. (Muñoz Sabaté, Luis, “Técnica probatoria. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso”, Edit. Praxis, Barcelona, 1983).

Undécimo: Que, al tenor de lo requerido por el N° 1, del artículo 488 del código del ramo, los hechos base deben ser, antes que nada, reales y probados por otros medios distintos de las presunciones. *“Los hechos generadores deben hallarse probados en la causa y esta prueba debe constar por los otros medios, vale decir, no por otras inferencias”* (Silva, Mauricio. “Las presunciones judiciales y legales. Construcción lógica de las pruebas indirectas”, Editorial Jurídica ConoSur, 1989, p. 58).

Duodécimo: Que, sin embargo, la decisión de absolución contenida en el fallo impugnado no obedeció a una falta de ponderación de los elementos que afirman los articulistas, sino que la misma responde a que, el cúmulo de antecedentes recabados en autos no logran formar convicción, en el estándar que



exige el artículo 456 bis del código adjetivo —y que resulta una facultad privativa de los sentenciadores del fondo— en orden a que realmente les asistió participación a los encartados en los delitos de secuestro calificado de las víctimas en alguna de las formas de intervención punible de acuerdo a los artículos 15, 16 y 17 del código punitivo. El motivo segundo de la sentencia impugnada consigna que fue, precisamente, la valoración de los elementos de convicción allegados a la causa lo que no permiten alcanzar convicción judicial de condena, sin que lo argumentado por los querellantes, dada su generalidad, permita alterar lo concluido en primera instancia.

Decimotercero: Que, en relación a la infracción al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, si bien los querellantes citan la sección del precepto que reviste la condición de norma reguladora de la prueba —numerandos 1° y 2°—, en rigor, la lectura de los recursos no demuestran la imputación de haberse vulnerado tal disposición pues, para fundamentar sus reclamaciones, citan una determinada cantidad de elementos probatorios reunidos en la causa, los que, en su concepto, satisfacerían las exigencias de la ley procesal penal para producir prueba. Sin embargo, omiten explicar a este Tribunal de Casación la forma concreta en que los jueces, que valoraron esos antecedentes, habrían incurrido en infracción de ley al no otorgarles el mérito de las presunciones judiciales que se aseveran existentes, tarea que en un recurso de derecho estricto es de cargo de quien lo interpone y no de la Corte encargada de conocerlo y resolver sobre lo pedido.

Es de toda evidencia que respecto de los requisitos “hechos reales y probados” y “múltiples” no puede entenderse demostrada su concurrencia, a



través del mero relato de determinadas piezas del proceso, omitiendo el raciocinio lógico —razonado—, dirigido a poner de manifiesto en el escenario procesal el apartamiento de los jueces de las normas legales respectivas, que es el supuesto indispensable para el ejercicio de las facultades de una Corte de Casación, encargada de velar por la correcta aplicación de la ley. En consecuencia, no lográndose una alteración del sustrato fáctico establecido por los sentenciadores del fondo, tampoco logra configurarse el yerro propuesto en relación a las normas sobre participación de los acusados en el delito investigado.

Decimocuarto: Que, el Mensaje del Código de Procedimiento Penal consigna como una base general y superior a toda demostración jurídica, que la convicción del juez adquirida por los medios de prueba legal es de todo punto indispensable para condenar. Si esa convicción no llega a formarse, el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualesquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje en contra del reo. En correspondencia con ello el artículo 456 bis del texto normativo dispone que *“Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley”*.

Esa labor de revisión del proceso no es jurídica, sino de hecho, propia de un tribunal de instancia, no revisable por vía de casación, razón por la cual los recursos en estudio deberán ser desestimados.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 500, 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, 170 y 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se decide:

I.- Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de nueve de diciembre de dos mil veinte, escrita a fojas 2.839 y siguientes.

II.- Que **se rechazan** los recursos de casación en el fondo, propuestos por la defensa del sentenciado Pedro Octavio Espinoza Bravo y por los querellantes, a fojas 2.859, 2.875 y 2.884, respectivamente, contra la referida sentencia, la que en consecuencia, **no es nula**.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos, quien fue del parecer de acoger los recursos de casación en el fondo sostenidos por los querellantes y, consecuentemente, pronunciar sentencia de reemplazo que condene, además, a los encartados José Aravena Ruíz y Jorge Andrade Gómez en calidad de autores de los delitos de secuestro calificado perpetrados contra las víctimas de autos, teniendo para ello presente que, como se sostiene en dichos recursos, en la sentencia recurrida se ha incurrido en las causal de nulidad sustancial prevista en el artículo 546, N° 7 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 488, numerales 1° y 2° del mismo código.

En efecto, en concepto del disidente, los sentenciadores del grado incurrieron en una infracción a la ley reguladora de la prueba, al no atribuirle el



mérito probatorio de presunciones judiciales a los numerosos indicios del proceso, todos ellos reales y probados, además de múltiples y graves —y que asimismo son precisos, directos y concordantes—, dejando de aplicar la segunda de las disposiciones antes citadas; indicios tales como las circunstancias establecidas en autos en orden a que los acusados José Abel Aravena Ruíz y Jorge Claudio Andrade Gómez pertenecían al grupo operativo Halcón, que formaba parte de la Brigada Caupolicán de la DINA, el que durante el año en que acaecieron los hechos se dedicó a la represión de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), calidad que tenían las víctimas de la presente causa, y cuyo centro de operaciones se encontraba ubicado en el Cuartel Terranova o Villa Grimaldi, donde se asentaba el aludido grupo operativo y lugar en que fueron vistos por últimas vez las aludidas víctimas. Luego, en base a tales presupuestos fácticos, debieron concluir, lógica y racionalmente, que los acusados en referencia tuvieron participación, en calidad de autores, en los delitos de secuestro calificado materia del proceso y dictar la sentencia condenatoria correspondiente en su contra.

Regístrese y devuélvase con sus tomos y agregados.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari y, de la disidencia, su autor.

N° 14.381-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firman el Ministro Sr. Valderrama y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y ausente respectivamente.



En Santiago, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

